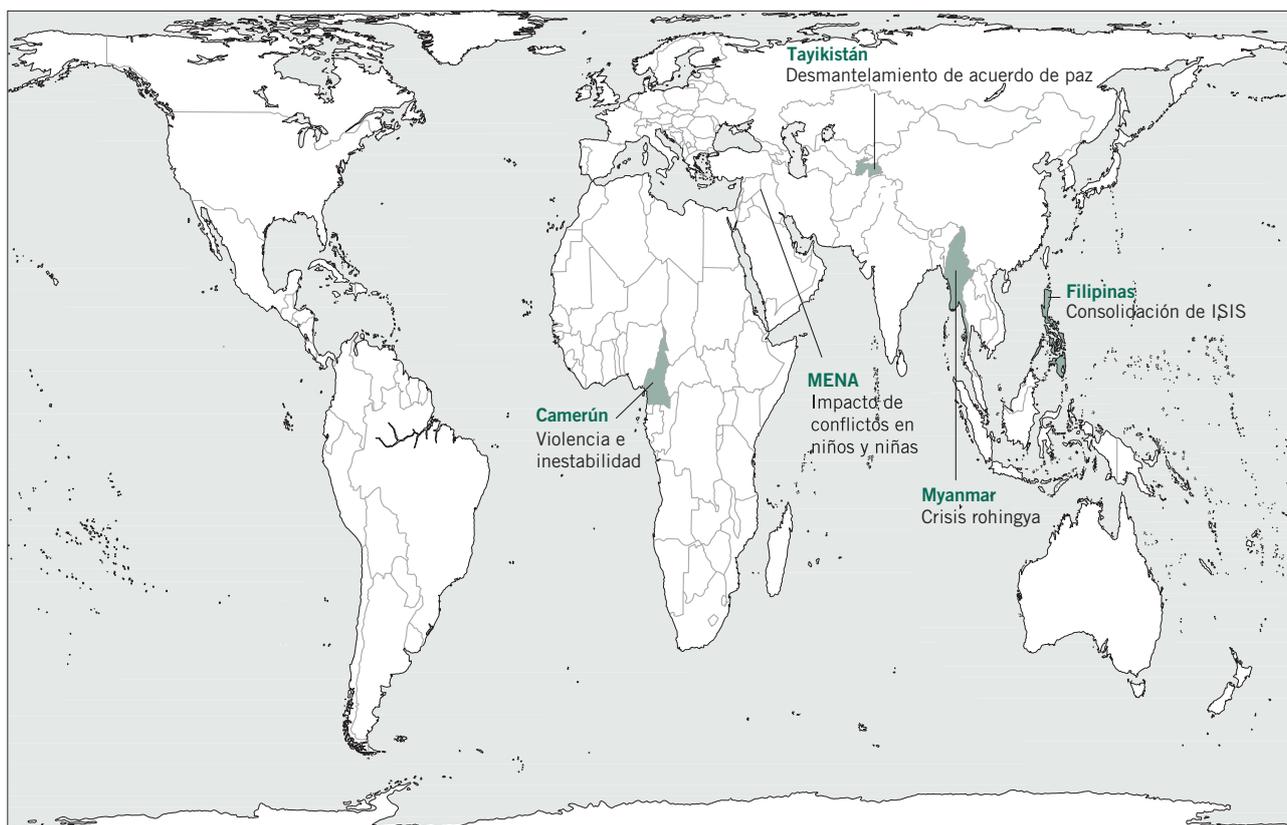


5. Escenarios de riesgo para 2018

A partir del análisis del año 2017 de los escenarios de conflicto armado y tensión a nivel mundial, la Escola de Cultura de Pau de la UAB identifica en este capítulo cinco contextos que por sus condiciones y dinámicas pueden empeorar y convertirse en focos de inestabilidad y violencia todavía más graves durante 2018. Los escenarios de alerta de cara al año 2018 hacen referencia a la escalada de violencia y el aumento de la inestabilidad en Camerún, a la consolidación del grupo armado ISIS en el sur de Filipinas y en el Sudeste Asiático, a las repercusiones de la crisis rohingya para la transición democrática y el proceso de paz en Myanmar, a la reducción del espacio opositor y el desmantelamiento del marco post-acuerdo de paz en Tayikistán, y al impacto de los elevados niveles de violencia en los niños y niñas como consecuencia de los graves conflictos armados que afectan el norte de África y Oriente Medio.

Mapa 5.1. Escenarios de riesgo para 2018



5.1. Escalada de la violencia y de la inestabilidad en Camerún

Camerún, conocido como “el África en miniatura”, por ser el hogar de más de 230 grupos lingüísticos diferentes, hasta la fecha no había atraído la atención de la comunidad internacional a pesar de la mala gobernabilidad vinculada a una excesiva centralidad del sistema político y de los altos índices de corrupción que azotan el país liderado por el sempiterno Paul Biya desde 1982. No obstante, el país afronta una escalada de la inestabilidad vinculada a diversas cuestiones internas y regionales que pueden situarle en 2018 al borde de la guerra civil en un año crucial para el país.

En primer lugar, Camerún está sufriendo las consecuencias de estar situado entre dos de los peores conflictos armados que han afectado el continente en los últimos años: los que padecen sus vecinos Nigeria y la República Centroafricana. En el caso de Nigeria, el conflicto en un primer momento afectaba el norte del país pero progresivamente se ha ido ampliando desde 2014 a toda la subregión del Lago Chad, incluyendo a Chad, Níger y Camerún. En el caso de Camerún, la región más afectada es la región de Far North, donde se estima que han muerto alrededor 2.000 personas (unos 1.800 civiles y 175 soldados) como consecuencia de los ataques de Boko Haram (BH). El grupo ha secuestrado unas mil personas y ha quemado y saqueado decenas de localidades. La región de Far North alberga 96.000 personas nigerianas huidas del conflicto que, a su vez, también ha provocado el desplazamiento de 241.000 cameruneses por las acciones de este grupo armado a fecha de enero de 2018. Aunque el grupo está debilitado por las acciones militares coordinadas a nivel regional, en 2017 murieron 27 soldados y gendarmes, así como 210 civiles, y el conflicto podría escalar en función de la implicación del Gobierno en la región.¹ En lo concerniente a la República Centroafricana, a fecha de enero de 2018, 249.000 personas centroafricanas habían huido de la escalada de los enfrentamientos entre las milicias ex Séléka y las anti-balaka durante los últimos tiempos y buscado refugio en las regiones camerunesas de Adamawa, Este y Norte, según UNHCR, agravando la situación humanitaria en la zona. Además, grupos armados procedentes de RCA han perpetrado esporádicos ataques y secuestros en localidades fronterizas camerunesas lo que ha provocado la respuesta militar camerunesa y el cierre puntual de la frontera común.²

En paralelo, se ha agravado la crisis que afecta a las regiones anglófonas (Northwest y Southwest), en el oeste del país, y que nació como una protesta sectorial en 2016 aunque tiene unas raíces que se remontan al periodo colonial y a la creación del Estado camerunés y al sentimiento de marginación política y económica que viven la minoría anglófona del antiguo sur del Camerún británico (20% de la población del país) por parte de las instituciones del Estado, controlado por la mayoría francófona. La represión violenta de las masivas movilizaciones del 22 de septiembre y el 1 de octubre de 2017 ha desencadenado el surgimiento de movimientos insurgentes. Desde octubre de 2016 hasta finales de 2017 habían muerto unos 90 civiles, unas decenas de soldados y gendarmes y un número indeterminado de insurgentes, más de 1.000 personas habían sido arrestadas, más de 30.000

personas habían buscado refugio en Nigeria y decenas de miles de personas se habían desplazado internamente como consecuencia de la violencia. La escalada de la tensión en las regiones anglófonas tiene además como consecuencia el incremento de las acciones de BH ante la débil reacción de los cuerpos de seguridad, según señala ACLED, ya que el Gobierno camerunés está más preocupado de hacer frente a las acciones de las organizaciones insurgentes de las regiones anglófonas que a los ataques de BH contra la población civil en el norte de Camerún, por lo que BH está aprovechando esta situación.

Ante esta convulsa situación, el país se ve afectado por una creciente inseguridad alimentaria agravada por la afluencia de poblaciones desplazadas como consecuencia de los diferentes escenarios de inestabilidad interna y regional. Según un informe del PMA de diciembre de 2017, el 16% de la población del país (3,9 millones de personas) se enfrentaba a una situación de inseguridad alimentaria entre moderada y grave.

Todo esto guarda relación con los problemas estructurales que padece el país en términos de gobernabilidad, que se une a la grave situación económica derivada de la subida de los precios y la caída del crecimiento del país como consecuencia de la crisis. Para agravar la situación, el país debe celebrar cuatro ciclos electorales en 2018 – municipales, senatoriales, parlamentarias y presidenciales. No se auguran muchas novedades respecto a sus resultados, ya que el país está controlado por el partido en el poder desde la independencia en 1960, el Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), que hasta 1985 se denominaba Union Nationale Camerounaise. El RDPC ha ganado sistemáticamente todas las elecciones, algunas boicoteadas por la oposición política, que acusa al RDPC de controlar todos los mecanismos del poder en el país. El límite de mandatos presidenciales fue eliminado por el Parlamento en 2008, facilitando la perpetuación de Biya en el poder, decisión que provocó en ese momento una escalada de las movilizaciones y de la represión de los cuerpos de seguridad. Las elecciones en el país se han visto sistemáticamente plagadas de fraude e irregularidades denunciadas por la oposición y detectadas por observadores internacionales. En este sentido, los cuatro ciclos electorales del otoño de 2018 que culminarán con las elecciones presidenciales en octubre serán un nuevo termómetro de la gobernabilidad en el país ante un posible inicio de transición programada por Paul Biya (85 años), el gobernante con más años en el poder en todo el continente africano. Aunque se prevé que vuelva a presentarse y a conseguir una amplia mayoría, su partida podría incrementar la inestabilidad, según diversos analistas, debido a las pugnas internas en el seno del RDPC para sucederle. Por otra parte, también apuntan a un boicot electoral por parte de los movimientos independentistas en las regiones occidentales que podría ampliarse a otras zonas del país. En conclusión, la confluencia de los diferentes ejes de división y conflictos locales, nacionales y regionales podrían provocar una involución del país y una espiral de violencia e inestabilidad de consecuencias imprevisibles.

1. Watch List 2018, EU Watch List 10 / From Early Warning to Early Action, International Crisis Group, 31 de enero de 2018.
2. Moki Edwin Kindzeka, “Cameroon Seals Border as Fresh Violence Escalates in CAR”, VOA, 28 de septiembre de 2017.

5.2. La consolidación de ISIS en el sur de Filipinas y en el Sudeste Asiático

A pesar de los avances en el proceso de paz entre el Gobierno y el MILF y del buen funcionamiento de los mecanismos de supervisión del alto al fuego –desde el año 2015 no se han producido episodios de violencia significativos–, durante el año 2017 en Mindanao se registró un incremento sin precedentes en la actividad armada por parte de organizaciones que han proclamado su lealtad a Estado Islámico (ISIS). Cabe destacar especialmente los enfrentamientos que entre los meses de mayo y octubre se produjeron en la ciudad de Marawi (provincia de Lanao del Sur) entre las Fuerzas Armadas y el denominado grupo Maute y otras organizaciones armadas afines a ISIS, y que provocaron la muerte de más de 1.100 personas, el desplazamiento forzoso de más de 600.000 personas y la destrucción de una parte significativa de Marawi, una ciudad de unos 200.000 habitantes. El asedio a la ciudad de Marawi, que según algunos medios fue la mayor batalla librada por ISIS fuera de Siria e Iraq, captó la atención de medios de comunicación de todo el mundo e incrementó notablemente la preocupación de buena parte de la comunidad internacional por la posibilidad de que el Sudeste asiático en su conjunto –y Mindanao en particular– se convierta en un frente importante de la actividad de ISIS y/o de organizaciones cercanas o afines.

En años anteriores ya habían proliferado informaciones sobre una mayor articulación entre grupos yihadistas en Mindanao y sobre las intenciones de ISIS de tener una presencia estable en dicha región. En 2016 ISIS había reconocido oficialmente la lealtad y obediencia hecha pública por numerosos grupos en Filipinas; había anunciado su intención de crear una provincia (*wilayat*) del Califato en la región; había designado a un líder de la organización en la zona; había reivindicado un atentado de envergadura –18 soldados murieron y más de 50 resultaron heridos en la región de Basilan– y había asegurado disponer de 10 batallones de combatientes en cinco localizaciones diferentes de Filipinas. Sin embargo, los acontecimientos de Marawi, junto con el incremento de la actividad por parte de organizaciones como Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) –especialmente en la provincia de Maguindanao y Cotabato Norte–, Abu Sayyaf –especialmente en el archipiélago de Sulu– o Ansar Al Khilafah –sobre todo en la provincia de Sarangani– denotaron un salto cualitativo en la capacidad bélica de ISIS en el Sudeste asiático y provocaron serias preocupaciones por el impacto que ello pudiera suponer en el proceso de paz entre el Gobierno y el MILF y por la posibilidad de que determinadas ideologías extremistas pudieran extenderse entre determinados sectores de la población.

Durante el año el propio Gobierno anunció que estimaba en 50 el número de células de ISIS en Mindanao, pero algunos analistas han sugerido que la situación se puede agudizar en el futuro, por varios motivos. En primer lugar, por la posibilidad de que las derrotas militares infringidas recientemente a ISIS en Siria e Iraq y la pérdida de sus bastiones principales de Mosul y Raqqa puedan comportar, por un lado, el incremento de su actividad bélica en

otras regiones del mundo para desviar la atención de los acontecimientos en Siria e Iraq y, por otro lado, la posibilidad de que se incremente el retorno a sus países de origen de combatientes provenientes del Sudeste Asiático.³ Se estima que cientos de personas (hasta 1.200) del Sudeste Asiático se desplazaron a Siria e Iraq para combatir en las filas de ISIS y que alrededor de 100 combatientes han fallecido en los dos mencionados países. De hecho, una facción dentro de ISIS, de denominada Katibah Nasuntara, estaba conformada por combatientes de la región. Además, el hecho de que desplazarse a Siria e Iraq sea cada vez más complicado –y tal vez tenga menos sentido– hace de Mindanao un lugar más estratégico y atractivo desde el punto de vista del yihadismo. Según algunos analistas, entre las personas que combatieron en Marawi, decenas de ellas provenían de varios países de la región de mayoría musulmana, como Indonesia o Malasia.⁴

Algunos analistas han advertido sobre la posibilidad de que la ideología de organizaciones yihadistas pueda extenderse entre determinados sectores de la población por la situación económica y política de Mindanao. En el plano económico, aunque Mindanao es un territorio próspero, fértil y con abundantes recursos, las provincias sureñas de mayoría musulmana, que coinciden en buena medida con las que integran la Región Autónoma del Mindanao Musulmán, se encuentran entre las más empobrecidas del país. En el plano político, amplios sectores de la sociedad han ido acumulando un creciente escepticismo sobre la voluntad y capacidad del Estado de resolver el conflicto en Mindanao. De hecho, un análisis histórico de los intentos de resolver el conflicto a través de la negociación evidencia numerosos incumplimientos por parte del Estado. El Acuerdo de Trípoli firmado en 1976 entre el Gobierno y el MNLF no fue implementado por parte del dictador Ferdinand Marcos. Más tarde, con la recuperación de la democracia a mediados de los años 80, el Gobierno de Corazón Aquino reanudó el diálogo con el MNLF, que acabó firmando un acuerdo de paz con el Gobierno de Fidel Ramos en 1996. Sin embargo, el MNLF sostiene que dicho acuerdo jamás fue implementado plenamente, por lo que desde entonces ha intentado negociar bilateralmente con el Gobierno. De hecho, en dos ocasiones el fundador del MNLF, Nur Misuari –también gobernador de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán– ha llevado a cabo rebeliones armadas importantes –en los años 2001 y 2013– alegando, entre otras cuestiones, incumplimientos por parte del Estado. Además de la no implementación del acuerdo de paz de 1996, varias voces han denunciado que detrás de la percepción generalizada de que la RAMM no ha funcionado ni puede llegar a solucionar el denominado “problema moro” se halla el escaso compromiso del Estado con la RAMM. En cuanto al proceso de paz con el MILF, tras 17 años de negociaciones se alcanzó en 2014 un acuerdo de paz, cuya piedra angular era la creación de una nueva entidad denominada Bangsamoro (o Región Autónoma de Bangsamoro) que sustituyera a la RAMM. Sin embargo,

3. Westerman, Ashley, *How Big A Threat Is Extremism In Southeast Asia?*, NPR, 11 de junio de 2017.

4. Sanderson, Thomas, “Black Flags over Mindanao: ISIS in the Philippines”, Center for Strategic and International Studies, julio de 2017.

tanto el establecimiento de dicha nueva entidad como la operacionalización y la concreción legislativa del acuerdo de paz dependen de la aprobación de la Ley Fundamental de Bangsamoro. Dicha ley debería haber sido aprobada al año siguiente de la firma del acuerdo de paz, pero tras varios retrasos en su tramitación parlamentaria, finalmente se descartó su aprobación a principios de 2015 después de que algunos miembros del MILF se vieran involucrados en una masacre en la provincia de Maguindanao en la que murieron 44 miembros de las fuerzas especiales filipinas. En 2017 se reanudaron las tareas de la Comisión de Transición de Bangsamoro para aprobar dicha ley, pero analistas han advertido sobre el escaso apoyo que ésta tiene en ambas cámaras parlamentarias y han anticipado la posibilidad de que la prioridad política del actual presidente, Rodrigo Duterte, sobre la transformación de Filipinas en un estado federal puedan diluir los contenidos de la Ley Fundamental de Bangsamoro o bien dilatar su aprobación. En cualquier caso, el principal problema al que se enfrenta el MILF actualmente es que la credibilidad de su propuesta (conformación de un nuevo marco autonómico a través del diálogo) depende en buena medida de la voluntad política de su interlocutor. Hasta el momento, los incumplimientos y retrasos sistemáticos del Estado hacia los acuerdos de paz firmados con las dos principales organizaciones moro (el MNLF y el MILF) parecen haber hipotecado en buena medida los esfuerzos del MILF en contener y canalizar pacíficamente los agravios y las demandas de una parte importante del pueblo moro.

A pesar de que una eventual derrota de ISIS en Siria e Iraq, la falta de compromiso del Estado hacia una solución estable al conflicto en Mindanao y la creciente organización y consolidación de ISIS en la región permiten augurar una cronificación e incluso incremento de la violencia en Mindanao, también es cierto que hay algunos factores que podrían menoscabar o dificultar la consolidación de ISIS en Mindanao y en el Sudeste Asiático en general. En primer lugar, los cinco meses de graves combates en Marawi erosionaron notablemente la capacidad militar de ISIS en Mindanao y de algunos grupos armados que le apoyan o dicen combatir en su nombre. Así, al terminar la ofensiva militar en Marawi a finales de octubre, habían muerto alrededor de un millar de combatientes, incluyendo a Isnilon Hapilon –el presunto líder de ISIS en la región–, a Omar y Abdullah Maute –líderes y fundadores del grupo–, así como varios de sus otros hermanos y Mahmud Ahmad, combatiente de origen malasio que, según la inteligencia filipina, había jugado un papel importante en las relaciones entre ISIS y varios de los grupos que operan en Mindanao. Además, la muerte a principios de 2017 en la provincia de Sarangani de Mohammad Jafaar Maguid, alias Tokboy –líder y fundador de Ansar Al-Khilafah– podría suponer,

Los enfrentamientos de la ciudad de Marawi, el incremento de la actividad armada por parte de organizaciones que han jurado lealtad a ISIS y la creciente atención que el propio ISIS está dedicando a Mindanao y el Sudeste Asiático han provocado una reacción importante por parte de varios Gobiernos

según el Gobierno, el desmembramiento del grupo y un debilitamiento de ISIS en el Sudeste Asiático por los estrechos contactos que mantendría con combatientes de ISIS en Siria. En segundo lugar, los hechos de Marawi –y el fortalecimiento de ISIS en la región que denotan– han generado una gran preocupación entre la comunidad internacional, que ha redoblado su cooperación con el Gobierno de Filipinas no solamente en su apoyo al proceso de paz con el MILF, sino también en la lucha contrainsurgente. Países como Australia o EEUU –los únicos países con estatus de Fuerzas Visitantes– jugaron un papel importante en los enfrentamientos en Marawi.⁵ Australia desplegó a unos 80 militares una vez finalizados los enfrentamientos, mientras que EEUU –con quien la administración de Duterte mantenía una relación bastante volátil– proveyó cuantioso armamento, drones y aviones, así como asistencia militar por parte de los entre 100 y 200 soldados desplegados en Filipinas. Además, estos enfrentamientos motivaron un incremento de la cooperación en materia de inteligencia y contraterrorismo de algunos de los países de la región como Malasia, Indonesia, Brunei o Tailandia.⁶ Ante un incremento de la actividad de Abu Sayyaf en la región, ya en 2016 los Gobiernos de Filipinas, Indonesia y Malasia habían firmado un acuerdo para intensificar la vigilancia y el control del Mar de Sulu. En tercer lugar, cabe destacar el sólido compromiso que hasta el momento han mostrado tanto el MNLF como el MILF en su lucha contra ISIS y contra la expansión del radicalismo. De hecho, el MILF participó activamente en la consolidación de un corredor humanitario en Marawi, mientras que el fundador del MNLF, Nur Misuari, ofreció el despliegue de cientos de combatientes.

A modo de conclusión cabe señalar que los enfrentamientos de la ciudad de Marawi, el incremento de la actividad armada por parte de organizaciones que han jurado lealtad a ISIS y la creciente atención que el propio ISIS está dedicando a Mindanao y el Sudeste Asiático han provocado una reacción importante por parte del Gobierno de Filipinas, del MILF y el MNLF, de algunos de los países de la región, de EEUU y otros actores destacados de la lucha global contra el terrorismo. Sin embargo, el incremento de la actividad armadas de grupos como Abu Sayyaf o el BIFF tras la derrota del Grupo Maute en Marawi o el hecho de que tras la finalización oficial de los combates aumentara el número de reclutamientos de organizaciones consideradas yihadistas hacen prever que una presencia de ISIS en la región a medio plazo, proveyendo nuevas oportunidades tanto a grupos armados locales como a sectores de la población reticentes a la posibilidad de que el actual proceso de paz con el MILF posibilite el acomodo de las demandas principales del pueblo moro y comporte una mejora de su bienestar.

5. ABS-CBN News, *US played key role in helping AFP retake Marawi, envoy*, AFP, 26 de octubre de 2017.

6. The Sunday Morning Herald, *Philippines' Battle for Marawi shows how South-East Asia can unite to fight terrorism*, 6 de febrero de 2018.

5.3. La crisis rohingya en Myanmar pone en riesgo la transición democrática y el proceso de paz

La grave crisis humanitaria y de derechos humanos que asoló Myanmar durante el año 2017 amenaza con poner en peligro los frágiles avances en términos de democratización y construcción de paz que han tenido lugar en el país en los últimos años. En agosto, las fuerzas de seguridad de Myanmar iniciaron una operación militar a gran escala en respuesta a varios ataques llevados a cabo por el grupo armado rohingya ARSA en el estado de Rakhine.⁷ Como consecuencia de esta operación, casi 700.000 personas rohingyas se desplazaron de manera forzada, refugiándose fundamentalmente en Bangladesh, y miles murieron fruto de la violencia. Además se documentaron múltiples casos de violencia sexual por parte de personal militar contra población civil y otras graves violaciones de derechos humanos, como incendios y saqueos. Diversas organizaciones de derechos humanos y Naciones Unidas alertaron de que la acción de las fuerzas de seguridad birmanas podía ser constitutiva de delitos de genocidio. Así pues, si bien al finalizar 2017 la intensidad de la violencia se había reducido, la grave crisis ha puesto de manifiesto la enorme fragilidad de los avances de la transición política iniciada en el país en los últimos años y liderada por la Consejera de Estado y premio Nobel de la paz, Aung San Suu Kyi.

La desproporcionada respuesta militar por parte de las fuerzas de seguridad birmanas a los ataques de ARSA han puesto de manifiesto el papel central que las poderosas Fuerzas Armadas pretenden seguir jugando en Myanmar. Tras décadas de férrea dictadura militar, el proceso de transición había dado lugar a un delicado equilibrio entre las fuerzas políticas y militares, que la crisis en Rakhine ha roto, dejando en evidencia la incapacidad de los poderes civiles de controlar y ejercer autoridad sobre el estamento militar. Pese a los múltiples llamamientos por parte de la comunidad internacional y de las organizaciones de derechos humanos para que se pusiera fin a la operación militar que estaba dejando tras de sí un éxodo masivo de población rohingya, las autoridades civiles no pusieron fin a la operación militar sin precedentes en la que se cometieron atroces violaciones de derechos humanos. De hecho, la propia Aung San Suu Kyi no se desplazó a la zona afectada por el conflicto armado hasta el mes de noviembre y el Gobierno negó en repetidas ocasiones las acusaciones de genocidio y limpieza étnica.

Aunque la violencia de mayor intensidad ha remitido, como se señaló anteriormente, se ha iniciado un proceso de militarización del estado de Rakhine, con un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad que han ocupado amplias zonas civiles. Este despliegue, unido a la destrucción de poblaciones enteras que fueron arrasadas y quemadas, hace prever que el retorno al estado de los

centenares de miles de personas desplazadas por la violencia está seriamente en riesgo. Así pues, la crisis humanitaria de desplazamiento –que actualmente tiene un carácter internacional, puesto que es Bangladesh el país donde se ha refugiado la inmensa mayoría de la población rohingya– amenaza con perpetuarse en el tiempo, con el consiguiente impacto en las condiciones de vida de centenares de miles de personas. La militarización de Rakhine, por tanto, no solo amenaza la fragilidad de las estructuras políticas civiles del país, construidas en los últimos años de transición, sino que también llevará con toda probabilidad al enquistamiento de la crisis humanitaria. Tampoco pueden descartarse nuevas acciones militares de la insurgencia rohingya, y el grupo armado ARSA, que ha estado inactivo en los últimos meses, podría llevar a cabo de nuevo ataques contra las fuerzas de seguridad o contra población rakhine. Además, el yihadismo internacional podría tratar de interferir en este conflicto, que hasta el momento ha permanecido ajeno a estas dinámicas. Grupos armados como ISIS o al-Qaeda ya han hecho algunos llamamientos a dar apoyo a la causa rohingya.

Por otra parte, la crisis en el estado de Rakhine también puede tener un impacto muy negativo en el proceso de paz que se está llevando a cabo con un amplio número de grupos armados de oposición y que se ha materializado en un acuerdo de alto el fuego de alcance nacional y en la celebración de la Conferencia de Paz Panglong 21.⁸ Sin embargo, persisten enormes dificultades para lograr avances sustantivos en el marco de esta Conferencia, fundamentalmente por la exclusión de los grupos armados que no han firmado acuerdos de alto el fuego. Indudablemente, la crisis de derechos humanos desencadenada tras la operación militar en el estado Rakhine representa un nuevo obstáculo para lograr definitivamente acuerdos de alto el fuego con todos los grupos insurgentes y avances en las reivindicaciones de las diferentes minorías étnicas que componen el país. La situación de seguridad en Rakhine ha impedido la celebración de procesos de consultas y de diálogo nacional asociados al proceso de paz, lo que ha derivado que se pospongan nuevas sesiones de la Conferencia Panglong 21, por ésta y otras dificultades.

Todos estos factores amenazan el futuro inmediato de Myanmar y han puesto de relieve la incapacidad tanto de las autoridades civiles como de la comunidad internacional para detener la masacre de la población rohingya. En el futuro inmediato se deberá hacer frente a las acusaciones de genocidio y limpieza étnica y, desde instancias internacionales, promover una investigación independiente de lo sucedido que permita la rendición de cuentas ante la justicia internacional.

7. Véase el resumen sobre Myanmar en el capítulo 1 (Conflictos armados).

8. Véase Escola de Cultura de Pau, “Un proceso de paz inclusivo en Myanmar”, *Alerta 2017! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Icaria, 2017.

5.4. El desmantelamiento del marco post-acuerdo de paz en Tayikistán y la reducción del espacio opositor

Sin apenas visibilidad mediática internacional, Tayikistán afronta una grave crisis interna: el desmantelamiento del marco político resultante del acuerdo de paz de 1997, que puso fin a la cruenta guerra civil en el país (1992-1997), causante de unas 50.000 víctimas mortales y en torno a 1,2 millones de personas desplazadas internas y refugiadas. Diversos son los factores que confluyen y que sitúan al país en un escenario de riesgo. La escalada de medidas políticas que desde 2015 han dejado a la oposición política religiosa fuera de la legalidad; la vulneración de derechos humanos de la oposición política, familiares de opositores y otros sectores de población, incluyendo defensores de derechos humanos; y con todo ello, la grave reducción del espacio para la crítica y la contestación democrática. El contexto geoestratégico regional –con Tayikistán como zona de influencia de Rusia y de creciente interés militar para China–, e internacional –con el foco internacional en la lucha contra el yihadismo–, no favorecen tampoco la priorización en los diálogos bilaterales y multilaterales de los riesgos al marco post-acuerdo y a los derechos humanos en el país.

Los factores de riesgo son diversos. Por una parte, el desmantelamiento del marco político post-acuerdo es ya una realidad que podría agravarse. El acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil tayika entre la coalición de fuerzas opositoras Oposición Tayika Unida (UTO) y las fuerzas gubernamentales de la recién independizada Tayikistán (Acuerdo General para el Establecimiento de la Paz y del Acuerdo Nacional y sus protocolos asociados, de 1997) incluía entre sus elementos políticos el levantamiento de la prohibición sobre los partidos políticos y movimientos de la UTO y avalaba su funcionamiento dentro del marco de la Constitución y la legislación del país. 18 años después, en agosto de 2015, el Gobierno ordenó el cierre del Partido del Renacimiento Islámico (PRI) –uno de los actores de la UTO–, alegando falta de representación territorial. La decisión llegó poco después de unas elecciones en las que el PRI quedó fuera del Parlamento y que la OSCE consideró que no alcanzaron los estándares democráticos, en un espacio político restringido y sin garantías de competitividad electoral. En septiembre de ese mismo año el Tribunal Supremo determinó que el PRI era una organización terrorista y más de una treintena de sus líderes fueron detenidos. Ello en un contexto de persecución contra otros grupos opositores, como el G24, y de presiones contra el islam en el espacio público. El desmantelamiento del régimen post-acuerdo dio un paso más en 2016, con la aprobación de cambios constitucionales –ratificados en referéndum–, que prohíben la existencia de partidos de base religiosa. El PRI era el único partido islamista legal en países centroasiáticos ex

La tendencia de restricción del espacio político en Tayikistán ha resultado en el desmantelamiento del marco de coexistencia política de los acuerdos de paz de 1997, situación que podría agravarse en los próximos años

soviéticos. En 2017, el número de miembros del PRI en prisión se elevaba a más de un centenar, según cifras del líder del PRI en el exilio, Muhiddin Kabiri.

Existe el riesgo de que esta pauta de desmantelamiento del marco de garantías de participación política para la oposición se agrave en 2018 y en los próximos años, en paralelo a un creciente proceso de acumulación del poder político por parte de la Presidencia. Así, en 2015 el Parlamento otorgó al presidente tayiko, Emomali Rahmon, el título de “Líder de la Nación”, inmunidad vitalicia y competencias ejecutivas cuando se retire, incluyendo poder de veto sobre decisiones de Estado, entre otras. Las enmiendas de 2016 abrieron las puertas también a la eliminación del número de mandatos presidenciales para Rahmon, sobre la base de su condición de “Líder de la Nación”, entre otros cambios. Estas modificaciones permitirán al presidente tayiko presentarse de nuevo a las elecciones de 2020, las cuales podrían tener lugar en un escenario de desmantelamiento de la oposición política. Las reformas también reducen el umbral de edad mínima de los 35 a los 30 años, facilitando así una posible candidatura de su hijo, Rustam Emomali, en caso de no presentarse su progenitor. Así, Las “draconianas restricciones a las voces opositoras” denunciadas en 2017 por el relator especial de la ONU para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión⁹ podrían expandirse aún más en el proceso hacia el monopolio del poder político.

Asimismo, se asiste a un grave deterioro del clima general de derechos humanos en el país. Por una parte, se ha incrementado la represión contra familiares de miembros del PRI encarcelados o en el exilio, incluyendo a través de presentación de cargos de intentos de derrocar el orden constitucional, acusaciones consideradas fabricadas por organizaciones de derechos humanos. Familiares de activistas políticos exiliados sufrieron detenciones, interrogatorios y en algunos casos palizas, según denunciaron políticos en el exilio.¹⁰ Además, las personas abogadas de casos relacionados con seguridad nacional, lucha antiterrorista o casos políticamente sensibles, fueron cada vez más objeto de hostigamiento, intimidación y presiones indebidas, según denunció Amnistía Internacional. Entre estos hechos, Buzurgmekhr Yorov, defensor de derechos humanos y abogado defensor en el proceso judicial contra el PRI y condenado a 28 años de cárcel, sufría palizas y amenazas en prisión, según denunció Amnistía Internacional en 2017. En el marco de la crisis de derechos humanos, también ha seguido la tendencia de presión contra las prácticas islámicas en el espacio público, que podrían agravarse a corto y medio

9. Consejo de Derechos Humanos, *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression on his mission to Tajikistan*, A/HRC/35/22/Add.2, 9 de junio de 2017.

10. Amnistía Internacional, *Informe 2017/2018. La situación de los derechos humanos en el mundo*, AI, 2018.

plazo. Esta política tiene repercusiones específicas de género, como la obligación en 2017 a miles de mujeres a quitarse el *hiyab* lugares públicos.¹¹ En los últimos años, se ha intensificado la presión contra lugares de culto, imanes y estudiantes de escuelas religiosas consideradas extremistas o foráneas. Analistas señalaron los riesgos de radicalización y riesgos de acercamiento a estrategias violentas de actores religiosos que están siendo excluidos y perseguidos por el régimen.¹²

En paralelo, la agenda de derechos humanos en las relaciones bilaterales y multilaterales ha quedado aún más relegada, en un contexto regional e internacional de priorización de la lucha contra el extremismo religioso a través de vías securitarias y de incremento de las alertas por los riesgos que supone el retorno de combatientes del grupo armado ISIS de nacionalidad centroasiática y rusa al conjunto de la región. En ese sentido, el presidente ruso, Vladimir Putin, alertó en 2017 de los planes de ISIS de desestabilizar las repúblicas ex soviéticas centroasiáticas y las regiones meridionales de Rusia. En 2017, algunos análisis situaban a Rusia como el principal país de origen de combatientes foráneos de ISIS, con en torno a 3.500 combatientes¹³ (4.000 según el presidente ruso). Por regiones, el centro de investigación Soufan Center situaba a las repúblicas ex soviéticas como la región de origen de mayor número de combatientes de ISIS (8.717 combatientes), seguida de

Oriente Medio (7.054) y –con más distancia– de Europa occidental (5.778) y Magreb (5.356).¹⁴ En ese contexto, uno de los ejes fundamentales de la política exterior de Tayikistán continúa siendo sus relaciones con Rusia, que sigue considerando a las repúblicas centroasiáticas ex soviéticas como zona de influencia, relación en la cual cuestiones vinculadas a garantías de participación política para la oposición o agenda de derechos humanos quedan relegadas. El creciente interés de China por Tayikistán, con un incremento de la cooperación militar y de seguridad, está relacionado –según analistas– con la percepción de los riesgos que supone la radicalización de la oposición ilegalizada y la situación de conflictividad en la vecina Afganistán, frontera con Tayikistán.¹⁵

Ante el escenario de deterioro de la situación en Tayikistán, que evidencia un desmantelamiento del régimen de coexistencia política emanado de los acuerdos de paz así como una política de persecución del extremismo que podría desencadenar efectos contraproducentes, y en ausencia de factores que permitan apuntar hacia una mejora en el corto plazo, resulta imperativo redoblar los esfuerzos internacionales encaminados a poner el foco en la agenda de derechos humanos –incluyendo libertades civiles y políticas– en las relaciones bilaterales y multilaterales con el régimen tayiko, así como incrementar los apoyos a sociedad civil local, incluyendo los y las defensoras de derechos humanos.

10. Ibid.

11. Goble, Paul, "Tajikistan, Most Muslim Country in Central Asia, Struggles to Rein in Islam", *Eurasia Daily Monitor*, Jamestown Foundation, Vol. 15, no. 18., 2018.

12. Barret, Richard. *Beyond the Caliphate: Foreign Fighters and the Threat of Returnees*, Soufan Center, octubre de 2017.

13. Ibid.

14. Partov, Umed, "Beijing Encroaching on Moscow's Military Dominance in Tajikistan", *Eurasia Daily Monitor*, Jamestown Foundation, Vol. 13, no. 185., 2016.

5.5. El impacto de los conflictos y la violencia en niños y niñas de la región MENA

La intensificación en los niveles de violencia y el deterioro en las condiciones de vida como resultado de los graves conflictos armados que afectan a diversos países del Norte de África y Oriente Medio (MENA) están teniendo un creciente impacto en un sector altamente vulnerable: los niños y niñas de la región. En los últimos años se han ido observando una serie de hechos y tendencias preocupantes en materia de letalidad, reclutamiento de menores, detenciones, desplazamiento forzado, violencia sexual, trabajo infantil y falta de acceso a la educación, entre otros ámbitos, que amenazan con dejar una profunda huella en toda una generación. Tanto por las consecuencias directas y a largo plazo de estas dinámicas, como por el hecho de que miles de niños y niñas de la región han nacido y crecido en medio de las hostilidades, por lo que apenas conocen un entorno diferente al de la guerra.

Las y los menores de edad se han visto crecientemente expuestos a morir o a resultar heridos en el marco de conflictos armados caracterizados por el uso indiscriminado y/o deliberado de la violencia en zonas densamente pobladas y en los que se transgreden múltiples normas del derecho internacional humanitario, incluyendo la necesaria distinción entre civiles y combatientes. Países como Libia, Yemen, Iraq o Siria ilustran esta tendencia. En el caso de Siria, los datos de UNICEF indican que 2017 fue el peor año en términos de letalidad del conflicto armado en niños y niñas, con un 50% de incremento en el número de muertes respecto a 2016 –910 muertes verificadas en 2017, aunque la cifra definitiva podría ser mucho más elevada teniendo en cuenta que las estimaciones de organizaciones como la Syrian Network for Human Rights (SNHR) apuntan a la muerte de 2.300 menores en el mismo período. En Yemen, a finales de 2017 UNICEF estimaba que un total de 5.000 menores habían muerto o resultado heridos desde la intensificación de la violencia en el país en marzo de 2015. Además de las consecuencias físicas y psicológicas por la exposición a brutales niveles de violencia, niños y niñas también sufren por la pérdida de familiares y amigos. En Iraq, por ejemplo, se estimaba que 90% de los menores de Mosul padecía traumas por la pérdida de una persona cercana.

Al finalizar 2017 uno de cada cinco menores de la región requería asistencia humanitaria inmediata, 90% de los cuales vivía en países afectados por conflictos. En algunos casos la entrega de ayuda humanitaria se vio obstaculizada por las medidas impuestas por algunos actores en conflicto, como en el caso del régimen de Bashar al-Assad y su política de asedios contra zonas controladas por la oposición – Aleppo y Ghouta Oriental son ejemplo de ello– o el bloqueo de Arabia Saudita en el conflicto yemení. Tanto UNICEF como OCHA llamaron la atención sobre los problemas de

malnutrición en estos países –1,8 millones de menores en Yemen, de los cuales 400.000 sufrían desnutrición severa; 20.000 con desnutrición severa aguda en Siria–, y HRW alertaba de que utilizar el hambre como estrategia de guerra, sin considerar su impacto en menores, constituía una de las tendencias más preocupantes de los conflictos en la región.

Niños y niñas de MENA también se vieron directamente afectados por la destrucción de infraestructuras civiles en el marco de estos conflictos, particularmente en el caso de hospitales y escuelas. En Yemen, el severo deterioro de las instalaciones de salud no sólo ha mermado las posibilidades de tratar a las personas heridas por el conflicto, sino también de controlar la expansión de enfermedades. Así, según datos de UNICEF, los niños y niñas menores de cinco años representaban un cuarto del millón de enfermos de cólera y otros graves casos de diarrea en Yemen, una situación agravada por la destrucción de infraestructuras sanitarias y la falta de acceso a agua potable. Paralelamente, millones de menores han padecido

La región MENA presenta tendencias preocupantes en materia de letalidad, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado, violencia sexual, trabajo infantil y falta de acceso a la educación que amenazan con dejar huella en toda una generación

los problemas en el sistema educativo. En Siria, por ejemplo, OCHA estimaba que el 40% de la infraestructura escolar se había visto afectada por el conflicto armado y que unos 180.000 profesores ya no estaban en servicio. Los menores sirios que han abandonado el país junto a sus familias en los últimos años tampoco tienen garantizada la escolarización. Así, por ejemplo, a finales de 2017 se estimaba que más de 280.000 menores sirios refugiados en Líbano permanecían fuera del sistema educativo.

Otro de los fenómenos preocupantes tiene que ver con el reclutamiento de menores por parte de actores armados. Datos de la ONU indican que los menores están asumiendo roles cada vez más activos –manejando armas, recibiendo entrenamiento, desempeñando tareas en puestos de control– y que el número de niños reclutados activamente para actividades de combate en la región se ha incrementado significativamente en los últimos años. En Yemen, desde marzo de 2015 hasta finales de 2016 se habían reclutado a más de 2.100 menores, según cifras verificadas por la ONU, principalmente por parte de las fuerzas al-houthistas. En Siria, numerosos actores armados han reclutado a niños y adolescentes en sus filas, algunos de los cuales han sido captados en los campos de refugiados en los países vecinos (en ocasiones con ofertas de compensación económica para sus familias). Tanto en Siria como en Libia e Iraq, el grupo armado ISIS desplegó una estrategia deliberada para el reclutamiento de niños para combatir en primera línea, perpetrar operaciones suicidas y otras acciones de extrema violencia, o utilizarlos como escudos humanos. Incluso se llegó a crear una unidad de ISIS integrada por menores (Fetiyeen al Jinneh). Tras el retroceso de ISIS en 2017,¹⁵ uno de los retos es

16. Véase los resúmenes de Iraq y Siria en el capítulo 1 (Conflictos armados).

qué ocurrirá con los niños soldados captados por el grupo armado. En Iraq, después de la expulsión de ISIS de Mosul, estos menores enfrentaban amenazas de venganza y algunos de ellos permanecían ocultos en campos de ayuda o casas particulares en el norte del país. HRW ha alertado de que el sistema judicial iraquí trata a estos menores como adultos y no como víctimas. Los informes recientes del secretario general de la ONU sobre menores y conflictos armados también han llamado la atención sobre el arresto y la detención de cientos de menores en países como Iraq, Siria o Yemen por su participación en grupos armados.

Cabe destacar que, a nivel global, Oriente Medio es la principal región emisora, pero también receptora, de población refugiada y desplazada internamente. El abandono del hogar, la ciudad y, en algunos casos, el país, ha afectado a millones de menores de la zona, que enfrentan dificultades para satisfacer sus necesidades más básicas. En situaciones de extrema precariedad, muchos menores se ven forzados al trabajo infantil. Así, se ha detectado a menores refugiados sirios de hasta seis años que están trabajando extensas jornadas en fábricas en Turquía. Lo mismo ocurre en Líbano, más aún teniendo en cuenta que las restricciones en los permisos de trabajo para los adultos convierten a muchos menores en los principales proveedores de sus familias. En el caso de las niñas, uno de los fenómenos más alarmantes es el incremento en los matrimonios forzados y a muy temprana

edad. Las estimaciones varían, pero algunas indican que los matrimonios de niñas y adolescentes se han cuadruplicado entre la población refugiada siria, con numerosos casos en Líbano, Jordania, Turquía y Egipto. En otros países de la región, como Libia, el desplazamiento forzado de población ha conducido a otras situaciones alarmantes, como la instalación de mercados de esclavos y los abusos contra población refugiada y migrante, incluyendo agresiones sexuales, que también han afectado a niños y niñas. Respecto a la violencia sexual, cabe recordar que ha sido utilizada por actores armados en varios conflictos de la región y que un caso emblemático ha sido el de ISIS y sus abusos contra la población yazidí. Miles de mujeres y niñas de esta minoría capturadas a mediados de 2014 fueron abusadas y convertidas en esclavas sexuales en Iraq y Siria.

El amplio abanico de formas de violencia a las que se han visto expuestos los menores en diversos países de MENA –y que en muchos casos continúa afectándoles– supone, por tanto, uno de los principales retos para el futuro de la zona. Lamentablemente, la espiral de conflictos, el constante desprecio por las normas de derecho humanitario por parte de numerosos actores armados, el bloqueo en las negociaciones para buscar salidas a las crisis y la falta de acción de la comunidad internacional están normalizando unos niveles de violencia en MENA que no permiten augurar un cambio a corto plazo que permita salvaguardar el futuro de millones de niños y niñas de la región.